encontrarse una sanción, que, sin ser el empleo de la fuerza, revistiese otros caracteres que los puramente morales. Si la cláusula de arbitraje se introdujese por ejemplo en todos los tratados de comercio, á la manera que se ha introducido la del tratamiento de nación más favorecida, resultaría por necesidad un compromiso mutuo entre todas las naciones que hubieran adoptado ese principio, que haría imposible el que ninguna se apartase de lo ofrecido, so pena de ser inmediatamente excluída de esa comunión internacional, fuera de la cual no es dado vivir á ningún pueblo. Habría, pues, una coerción positiva y eficaz que nacería de la índole misma del arbitraje y que no sería, sin embargo, el llamamiento á la fuerza.

Más difícil sería aplicar estas conclusiones al sistema propuesto por Mr. Richard, si por acaso prevaleciese y varias naciones suscribiesen á formar un comité permanente, al cual se refiriesen las cuestiones internacionales. Si llegado el caso del conflicto una nación entendía que aquella cuestión no caía bajo la jurisdicción del Tribunal, ó si la sentencia de éste no era respetada, habría un gran riesgo de que los otros países, que habían concurrido á la formación del Tribunal, quisieran hacer efectivas sus decisiones por la fuerza, y así un procedimiento jurídico para conservar la paz, la comprometería de una manera definitiva. Cuando se piensa en que la antigua Dieta de Francfort, nacida para conservar la paz entre los Estados de Alemania, fué el foco que preparó la lucha entre Prusia y Austria, aparecen al espíritu razones suficientes para negarse, no sólo á la idea de coerción, sino á un procedimiento que llevase implícitamente á ella.

Todas las anteriores consideraciones preparan conclusiones, que necesariamente han de concretarse y aparecer más definidas, cuando se determina la esfera de acción de un arbitraje, limitándole á las cuestiones que puedan surgir entre España, Portugal y los Estados ibero-americanos. Pero estas concreciones y determinaciones no alteran los principios generales, que quedan establecidos y que hemos creído deber anteponer para que las conclusiones sean más seguras y más sólidas.

Importa ante todo consignar que entre España, Portugal y los Estados de la América latina, no existen hoy cuestiones po-